



# Asamblea General

Distr. general  
18 de febrero de 2020

Original: español

---

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### **Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019**

#### **Opinión núm. 63/2019, relativa a Josiel Guía Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo (Cuba)**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el 17 de mayo de 2019 el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de Cuba una comunicación relativa a Josiel Guía Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo. El Gobierno respondió a la comunicación el 16 de julio de 2019, dentro del plazo establecido. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. La fuente presenta el caso de tres detenciones de activistas políticos, Josiel Guía Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo, donde se alega que han sido privados de su libertad por el ejercicio de sus derechos humanos y a través de un procedimiento que no contó con las garantías mínimas de un juicio justo, independiente e imparcial.

#### *Sr. Guía Piloto*

5. El Sr. Guía Piloto es cubano, nacido en 1982, domiciliado en La Habana. Es presidente del Partido Republicano de Cuba y, por esa razón, ante su negativa en cesar su trabajo político promoviendo la democracia y las elecciones, ha sido sujeto de represión y hostigamiento oficial, siendo detenido al menos en 22 ocasiones entre marzo de 2011 y enero de 2014.

6. De acuerdo con la fuente, el Sr. Guía Piloto, así como miembros de su familia, llevaba años siendo sometido a seguimientos por parte de la policía. El 1 de diciembre de 2016 fue interceptado por uno de los agentes que lo seguía, en la vía pública, para pedirle su documentación. El Sr. Guía Piloto fue informado de que estaba siendo arrestado y que sería trasladado a una estación de policía, junto con otro activista que estaba con él. Los agentes policiales, vestidos de civil, procedieron a asegurar al Sr. Guía Piloto, sin leer sus derechos ni justificar o informar el motivo por el cual estaba siendo privado de su libertad. Ante ello, el Sr. Guía Piloto comenzó a proferir críticas y opiniones adversas en contra del Gobierno y de sus líderes. Dichas expresiones fueron respondidas con accionar violento y daños físicos contra el detenido. El traslado a dependencias policiales fue posteriormente justificado en haber formulado expresiones verbales en contra del Gobierno y las autoridades. La fuente alega que el orden en que sucedieron los eventos revela la incongruencia jurídica y penal del arresto, en vista de que este se produjo antes de que fuese realizada la acción supuestamente criminal.

7. Según la fuente, durante el proceso se acusó al Sr. Guía Piloto de mostrar una conducta desajustada, por pretender trabajar por la consecución de elecciones libres y democráticas, y de mantener relaciones con individuos de interés policial, quienes son otros activistas políticos pro democracia. El Sr. Guía Piloto reconoció haber formulado palabras críticas contra el Gobierno una vez que se inició el arresto, pero negó haberse resistido o usado violencia. El abogado defensor no se opuso a los cargos y solo pidió la pena mínima, mientras que debió haber cuestionado la legalidad de los seguimientos, el arresto contra el Sr. Guía Piloto y los daños sufridos por este, así como debió haber atacado las contradicciones en las declaraciones de los agentes policiales como testigos de la acusación.

8. La fuente indica que, en el juicio contra el Sr. Guía Piloto, este fue defendido por un abogado que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, el principal promotor de la acusación, por lo que se alega que no existió una defensa legal adecuada. Se señala que en Cuba el Estado no solo cuenta con la Fiscalía para la acusación, sino también con los abogados defensores, quienes juntos contribuyen para que el tribunal falle en contra del acusado, a pesar de que rechace los cargos.

9. El Sr. Guía Piloto fue condenado, el 8 de agosto de 2017, a cinco años de prisión por los delitos de desacato y desórdenes públicos. El desacato está contemplado en el artículo 144.1 del Código Penal:

El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o

en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

10. La fuente indica que en Cuba se entiende como desacato el hecho de criticar al Gobierno públicamente, lo cual confirmaría las motivaciones políticas del arresto y juicio contra el Sr. Guía Piloto. El delito de desórdenes públicos se encuentra tipificado en el artículo 200 del Código Penal:

El que, sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

Si los actos previstos en el apartado anterior se realizan con el propósito de provocar pánico o tumulto, o de cualquier otra forma altere el orden público, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas.

11. La fuente señala que para la configuración de este delito se requiere que el desorden afecte a un conjunto de ciudadanos, a los cuales la sentencia presuntamente se refiere como a unas cuarenta personas que transitaban por el lugar. No obstante, la fuente critica que el tribunal se negó a tomar testimonio de esas personas y solo consideró las declaraciones contradictorias de los agentes policiales. Más aún, la fuente indica que el único desorden público que existió fue el creado por los funcionarios de seguridad cuando estos procedieron a asegurar a los detenidos con violencia, lo que habría llamado la atención de los transeúntes.

12. La fuente indica que, durante su estancia en prisión, la situación de salud del Sr. Guía Piloto se ha deteriorado, mientras que la administración penitenciaria se ha negado a facilitar los traslados al hospital y a facilitar las medicinas necesarias. Adicionalmente, preocupa la posibilidad de que su condena sea arbitrariamente extendida mediante la imputación de nuevos cargos. El 22 de marzo de 2019, el Sr. Guía Piloto recibió una fuerte golpiza en prisión, por negarse a usar el uniforme de recluso común. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Taco Taco.

#### *Sra. Mendoza Reyes*

13. La Sra. Mendoza Reyes es cubana, nacida en 1984, domiciliada en La Habana. Es activista de la Unión Patriótica Cubana, ha participado en actividades públicas y pacíficas de dicha organización, pidiendo reformas democráticas.

14. Según la información recibida, la Sra. Mendoza Reyes fue acusada por el delito de peligrosidad social predelictiva, conforme a los artículos 72, 76.1 y 78 del Código Penal, que estipulan:

72. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

76.1 Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas; y en el segundo, medidas de seguridad postdelictivas.

78. Al declarado en estado peligroso en el correspondiente proceso, se le puede imponer la medida de seguridad predelictiva.

15. De acuerdo a lo alegado por la fuente, esta medida es utilizada para arrestar a opositores políticos o críticos al Gobierno. No requiere pruebas, solo la sospecha de que el acusado puede estar, en un hipotético futuro, involucrado en actividades contrarias a la “moral socialista”. Se indica que las condenas supuestamente tienen el propósito de “reeducar” las inclinaciones políticas de los detenidos. Adicionalmente, la acusación es usada como advertencia para familiares y compañeros de los condenados para disuadirlos de tomar parte en actividades pro democráticas. La fuente alega que dicha situación ha

llevado a una violación de los artículos 9, 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

16. La fuente indica que, durante el juicio, el abogado que se suponía debía defenderla era jerárquicamente dependiente del Ministerio de Justicia. Por ello, se indica que no obtuvo una protección legal adecuada. El abogado se plegó a los cargos reclamados por la Fiscalía, absteniéndose de alegar y probar en favor de su defendida. Se alega que esto violó el principio de contradicción y de igualdad entre las partes del proceso.

17. El 18 de diciembre de 2017, a la Sra. Mendoza Reyes se le impuso la medida de dos años y medio de prisión por peligrosidad social predelictiva.

18. Además se informa que, el 30 de julio de 2018, la condena de la Sra. Mendoza Reyes fue ampliada seis meses, debido a la supuesta comisión del delito de desacato, tipificado en el artículo 144.1 del Código Penal. Se indica que dicha medida fue tomada con la mera acusación de un funcionario, eliminando la posibilidad de defensa o recurso judicial. La ampliación de condenas habría sido usada frecuentemente para mantener en prisión a presos políticos o de conciencia que no toman parte en las actividades de reeducación política en los centros de detención.

19. Finalmente, la fuente reclama que, tras la detención de la Sra. Mendoza Reyes, como parte de la persecución en su contra, su hijo habría sido expulsado de una escuela elemental de música en La Habana, sin ninguna explicación o justificación, como represalia por su activismo.

*Sr. Amaro Hidalgo*

20. El Sr. Amaro Hidalgo es cubano, nacido en 1973, domiciliado en Matanzas. Es activista del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

21. Según la información recibida, el Sr. Amaro Hidalgo fue arrestado el 13 de agosto de 2016, junto con otro activista de su partido, por agentes de la policía. Agentes policiales se habrían acercado al él y su compañero para corroborar que ambos portaban una camiseta en la que se podía leer “Democracia SÍ! Dictadura NO!” y “Abajo quien tú sabes”. Los agentes habrían exigido al Sr. Amaro Hidalgo abandonar la vía pública o removerse la camiseta. Ante la negativa de ambos activistas, llegó un gran número de policías al lugar, procediendo a su arresto y posterior traslado a una comisaría. Durante el momento en que ambos estaban siendo asegurados, el Sr. Amaro Hidalgo expresó fuertemente su opinión y críticas verbales contra el Gobierno y sus líderes.

22. Una vez en la comisaría, los agentes de policía habrían forzado violentamente al Sr. Amaro Hidalgo y a su compañero a quitarse las camisetas. Luego, ofrecieron dejarles en libertad a cambio de dinero y del decomiso de las camisetas. El Sr. Amaro Hidalgo solicitó un acta de decomiso que especificase el motivo por el cual se le retiraba la prenda. Ante esa respuesta, los oficiales encerraron al Sr. Amaro Hidalgo en una celda, con uso de la fuerza.

23. El Sr. Amaro Hidalgo fue acusado por los delitos de desacato y atentado. El primero de ellos, en virtud del artículo 144.1 del Código Penal y el delito de atentado, en virtud del artículo 142.1, que dispone:

El que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes auxiliares, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

24. El Sr. Amaro Hidalgo fue representado en juicio por un abogado que, como todos los abogados, estaba subordinado y en dependencia con el Ministerio de Justicia. La fuente señala que los abogados que ejercen una defensa con demasiado rigor en contra de la Fiscalía, se arriesgan a perder su licencia profesional. Resultó sorprendente que el abogado defensor, si bien no consiguió la absolución, negó los cargos imputados.

25. De acuerdo con la información aportada, el juicio se celebró a puertas cerradas. Además, el tribunal ignoró las declaraciones de los testigos que demostraron la inocencia del Sr. Amaro Hidalgo y quienes habrían sido detenidos brevemente en las horas anteriores a la audiencia de juicio oral del 7 de marzo de 2017. El tribunal solo tomó en cuenta las

declaraciones de los agentes policiales, quienes afirmaron haber sufrido un ataque violento por parte del Sr. Amaro Hidalgo en el momento en que este estaba siendo encerrado en una celda de la comisaría, luego de exigir un acta por el decomiso de la camiseta.

26. El Sr. Amaro Hidalgo fue sentenciado el 15 de marzo de 2017 por desacato y atentado, a un total de tres años de prisión.

27. Fue trasladado a la prisión de Agüica. Su estado de salud es extremadamente precario y está siendo sometido a golpes y burlas de los funcionarios, quienes le niegan asistencia sanitaria.

28. El 15 de febrero de 2019, a pocos meses de su liberación, la condena del Sr. Amaro Hidalgo fue aumentada en cinco años, por la supuesta comisión de atentado en prisión. La fuente indica que esta ampliación injustificada de la condena es una herramienta para continuar la detención de aquellos disidentes que no muestran una actitud sumisa durante su estancia en prisión. Esta nueva sentencia por atentado se basaría en un supuesto asalto por parte del Sr. Amaro Hidalgo contra los agentes encargados de los trabajos forzados en el penal, ante lo cual la fuente indica que lo realmente sucedido es que el Sr. Amaro Hidalgo se ha negado a realizar trabajo forzado.

#### *Respuesta del Gobierno*

29. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, el 17 de mayo de 2019, las alegaciones contenidas en los párrafos anteriores. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que proporcionase información detallada de los casos, incluyendo sobre los hechos alegados, la legislación aplicable y las investigaciones realizadas, en un plazo de 60 días. El Gobierno respondió el 16 de julio de 2019.

30. El Gobierno afirma que en Cuba no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los derechos humanos, los cuales están ampliamente reconocidos y protegidos por las leyes. Tampoco se criminaliza la defensa de los derechos humanos, ni se cometen actos de represalias.

31. Se indica que Cuba es un Estado socialista de derecho, donde impera el principio de legalidad, y no solo las autoridades y agentes policiales encargados de velar por la seguridad y el orden interior están sujetos a su estricto cumplimiento, sino también los órganos judiciales, abogados y fiscales. La amenaza e intimidación de los ciudadanos, así como cualquier ataque contra la vida o la integridad personal, están proscritos. Además, existen mecanismos de denuncia contra tales hechos, en el ámbito disciplinario y en el ámbito penal si fuera el caso.

32. En Cuba los procedimientos de investigación vinculados a la comisión de delitos, los procedimientos judiciales y de protección a las víctimas, están tutelados en normativas jurídicas y respaldados por garantías jurídicas. La manera en que se articulan estos procedimientos se encuentra en plena correspondencia con las obligaciones internacionales del Estado.

33. El Gobierno indica que es falso que el Sr. Guía Piloto sea un activista político, o un defensor de los derechos humanos, y que se le haya acusado de mostrar una conducta desajustada por pretender trabajar por la consecución de elecciones libres o democráticas y por mantener relaciones con individuos de interés policial.

34. Es falso que el Sr. Guía Piloto haya sido objeto de represión y hostigamiento oficial, y sometido a seguimientos junto a miembros de su familia por parte de las autoridades policiales. También es falso que haya sido arrestado en 22 ocasiones a causa de su supuesto activismo político. En Cuba no se detiene a nadie por el ejercicio de sus derechos humanos, así como tampoco existen presos políticos. Las detenciones se realizan de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal (núm. 5 de 1977), por haber cometido un delito previsto y sancionado en el Código Penal (núm. 62 de 1989), con independencia de la opinión política. El Sr. Guía Piloto fue detenido y procesado por un delito común.

35. Al momento de cometer el delito, el Sr. Guía Piloto se encontraba en libertad condicional, extinguió sanción de tres años de privación de libertad impuesta por sentencia del 15 de septiembre de 2014, por hurto en grado de tentativa, sanción esta que cumplió

entre el 17 de diciembre de 2014 y el 12 de junio de 2017. Al estar cumpliendo sanción en el momento de los hechos, concurre la agravante extraordinaria del artículo 54.4 del Código Penal.

36. Se informa que, el 1 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 11 horas, el Sr. Guía Piloto se encontraba con otra persona en la parada del ómnibus, siendo observados por dos agentes del orden público que vigilaban que no se cometieran hechos de hurto. Por la actitud sospechosa mostrada, ante la latente posibilidad de que fueran a incurrir en un delito, las autoridades policiales le solicitaron su documentación de identidad, a lo que accedieron. Ante el llamado de atención de los agentes para que los acompañaran a la Unidad Policial Territorial, comenzaron a proferir insultos contra estos. El Sr. Guía Piloto, de manera ofensiva y faltando al respeto de la autoridad, profirió ofensas contra la familia de uno de los agentes y lo amenazó con escupirlo. La resistencia al arresto del segundo individuo, creó una situación compleja que fue resuelta por los agentes del orden con profesionalidad.

37. Es falso que el arresto del 1 de diciembre de 2016 haya sido violento y que se hayan producido daños físicos al detenido. Las autoridades de orden interior no agreden, reprimen o golpean a la población.

38. Una vez detenidos y habiéndose cumplido todas las garantías previstas en la legislación penal, se abrió el expediente de fase preparatoria en el cual consta: el acta de detención, del 1 de diciembre de 2016, en la que obra como motivo desorden público; el auto de la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja, imponiendo la medida cautelar de prisión provisional correspondiente; y la notificación de la resolución al acusado, en la que se le instruye del derecho de designar abogado, la que fue firmada por el Sr. Guía Piloto.

39. Para el Gobierno, es falso que el Sr. Guía Piloto haya sido defendido por un abogado subordinado al Ministerio de Justicia. Los abogados pertenecen a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. El artículo 5 del Decreto-ley sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (núm. 81 de 1984), define a esta institución como una entidad autónoma nacional, de interés social y carácter profesional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por juristas por voluntad propia.

40. Es igualmente falso que el abogado no se haya opuesto a los cargos imputados en la acusación. En su respuesta, el abogado negó que el acusado hubiese cometido los actos imputados. Tras la confesión del Sr. Guía Piloto, modificó sus conclusiones provisionales, aceptó el delito de desacato y solicitó al tribunal la imposición de una sanción mínima.

41. El Gobierno señala que no es cierto que el Tribunal Municipal se haya negado a escuchar a las 40 personas que se aglomeraron en el lugar en razón de estos hechos. El órgano judicial admitió las pruebas propuestas por la Fiscalía y la defensa, todas las cuales fueron practicadas en juicio oral y público. Los testigos que pertenecen al Ministerio del Interior, trabajan en el enfrentamiento al hurto, no en el Departamento de Seguridad del Estado.

42. Se indica que son falsas las alegaciones sobre la configuración del desacato en virtud del artículo 144.1 y 2 del Código Penal. Este no se configura por criticar al Gobierno, sino por calumniar, amenazar, difamar, insultar, injuriar o de cualquier modo ultrajar u ofender de palabra o escrito la dignidad o decoro de autoridades, funcionarios públicos, sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones, o en ocasión de ellas. Es falso que el arresto y ulterior proceso penal seguido contra el Sr. Guía Piloto tenga motivaciones políticas.

43. En cuanto a la Sra. Mendoza Reyes, el Gobierno señala que no es una activista. Es totalmente falso que las medidas predelictivas sean empleadas para arrestar a los opositores políticos o críticos al Gobierno. El estado peligroso por conducta antisocial se aprecia en aquellos sujetos que quebrantan habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, transgreden o vulneran derechos de los demás, que su comportamiento daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o que practican vicios socialmente reprobables, cual es el caso de la Sra. Mendoza Reyes.

44. El Gobierno informa que la Sra. Mendoza Reyes fue asegurada el 18 de diciembre de 2017, luego de haberse agotado todas las medidas preventivas previstas, y luego de

haber sido advertida oficialmente en 43 ocasiones, de forma educativa e individual, para que desistiera de sus actividades que atentan contra las normas morales que imperan en la sociedad. Se le impuso la medida de internamiento por dos años, en un centro de trabajo o estudio, conforme lo establecido en el Código Penal.

45. Mientras la Sra. Mendoza Reyes cumplía la medida de seguridad que le había sido impuesta, se involucró en un desorden interno, y profirió amenazas a la oficial a su cargo. Por este incidente resultó sancionada, en la causa 24/2018 del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, a seis meses de privación de libertad por desacato. En razón de la imposición de esta sanción, se le suspendió el cumplimiento de la medida de seguridad predelictiva, conforme lo establecido en el artículo 77.2 del Código Penal, cuya ejecución reinició al extinguir la pena impuesta.

46. El Tribunal Municipal de Artemisa dispuso, en mayo de 2019, el cambio en la clase de la misma por una medida sin internamiento, medida esta que cumple en libertad, bajo el control del juez de ejecución.

47. Para el Gobierno es falso que la Sra. Mendoza Reyes fuera defendida por un abogado subordinado al Ministerio de Justicia, porque los abogados pertenecen a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Es igualmente falso que el Ministerio de Justicia sea el promotor de la acusación. El ejercicio de la acción penal respecto los delitos perseguibles de oficio recae en la Fiscalía, tal como figura en la Ley de Procedimiento Penal.

48. Respecto a la reclamación de la expulsión de un hijo del Sra. Mendoza Reyes de la escuela de música tras su detención, no consta en los registros de matrícula, asistencia, evaluación, traslados y bajas de la escuela, ningún alumno con filiación materna con la Sra. Mendoza Reyes.

49. Sobre el Sr. Amaro Hidalgo, el Gobierno señala que, el 13 de agosto de 2016, aproximadamente a las 22:30 horas, este individuo fue conducido por dos agentes del orden hacia la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Jovellanos, junto a otro ciudadano, por negarse ambos a cumplir con los requerimientos de los agentes del orden. Es falso que fuera forzado a quitarse su vestimenta, así como que les fue ofrecido dejarlos en libertad a cambio de 30 pesos y el decomiso de la prenda.

50. Según el Gobierno, el Sr. Amaro Hidalgo le propinó un golpe en el rostro a uno de los oficiales que se encontraba a su cargo e insultó y profirió ofensas que ultrajaron la integridad, dignidad y decoro de los agentes policiales, provocando con esta actitud una gran alteración del orden en el local de la policía.

51. El Sr. Amaro Hidalgo fue sancionado por estos hechos por el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos a una sanción conjunta y única de tres años de privación de libertad, como autor de los delitos de atentado y desacato.

52. El Gobierno indica que son falsas las alegaciones respecto a que la sanción del Sr. Amaro Hidalgo fue ampliada injustificadamente para extender en el tiempo la detención. La imposición de la nueva sanción se debió a la comisión de hechos violentos en el área laboral en la que le habían asignado una tarea. Ante la llamada de atención del oficial encargado de velar por la disciplina y garantizar el orden, el Sr. Amaro Hidalgo en extremo exaltado y en ademán desafiante, le amenazó con darle muerte empuñando el machete que llevaba en sus manos.

53. En Cuba no existen agentes encargados de los trabajos forzados en el penal, puesto que no se realizan ni se somete a persona alguna a la realización de trabajos de esta índole. El artículo 30.12 del Código Penal establece que los sancionados aptos para el trabajo pueden efectuar labores útiles, si acceden a ello, lo cual fue el caso del Sr. Amaro Hidalgo. El Gobierno destaca que Cuba cumple las obligaciones contraídas en instrumentos internacionales, puesto que las labores que los privados de libertad realizan son remuneradas y se contabilizan los años laborados en la jubilación.

54. En los juicios no se quebrantaron las garantías previstas para estos actos, fueron orales, públicos y contradictorios, tal como señala la legislación procesal cubana, lo que se aprecia en las respectivas sentencias.

55. Para el Gobierno son falsas las alegaciones con respecto al estado de salud, supuestas golpizas y burlas por parte de los funcionarios y la negativa de asistencia y cuidados sanitarios. Las autoridades cubanas de orden interior no tienen por práctica agredir, reprimir o golpear a la población ni a los detenidos. La Constitución establece en su artículo 60 la obligatoriedad del Estado en el cumplimiento de normas para el tratamiento de personas privadas de libertad.

56. Es falso que los acusados hayan sido defendidos por abogados subordinados al Ministerio de Justicia. Carece igualmente de fundamento que aquellos abogados que ejercen una férrea defensa arriesgan sus licencias para la práctica de la profesión. El ejercicio de la abogacía en Cuba no se vale de licencias, solo requiere estar habilitado para ejercer mediante el título correspondiente y ser admitido a su ejercicio por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

*Comentarios adicionales de la fuente*

57. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta del Gobierno el 17 de julio de 2019. La fuente presentó sus observaciones y comentarios el 27 de julio de 2019.

58. La fuente proporciona información detallada sobre la fecha, lugar y motivos por los cuales el Sr. Guía Piloto habría sido detenido en el pasado. Asimismo, suministra información de sus labores como activista por la democracia y defensor de derechos.

59. La fuente destaca discrepancias entre las narraciones de hechos y consideraciones jurídicas plasmadas en la sentencia del caso, frente a aquellas proporcionadas en la respuesta del Gobierno, señalando que estas revelan irregularidades desde el inicio del procedimiento.

60. Por ejemplo, la sentencia reconoce que el Sr. Guía Piloto resultó herido durante el arresto, mientras que el Gobierno indica que la aprehensión no fue violenta. Asimismo, la sentencia indicaría que en el juicio el Sr. Guía Piloto reconoció ejercer su libertad de expresión, negando los cargos de resistencia, mientras que el Gobierno en su respuesta afirma que los habría aceptado.

61. La fuente también indica que la sentencia reconoce incongruencias entre lo declarado por testigos en el expediente investigativo y lo posteriormente afirmado en el juicio oral. El Gobierno ha indicado que es falso que el tribunal se haya negado a escuchar a alguna de las 40 personas que presenciaron los hechos, mientras que en la sentencia o el expediente no se hace referencia al testimonio de ninguna. Fue solo el testimonio de los oficiales aprehensores, con incongruencias, la base para la condena.

62. En el caso de la Sra. Mendoza Reyes, la fuente proporciona información para sustentar que sí es una activista comunitaria. Se describen y dan ejemplos de las actividades de la Unión Patriótica Cubana como organización y de las labores que la Sra. Mendoza Reyes desempeñaba.

63. La fuente indica que la definición del estado peligroso por conducta antisocial y la definición de las medidas de seguridad predelictivas, excluyen por definición la comisión de delitos. Para la fuente, al ser una medida de privación de libertad en la que el acusado no ha cometido delito alguno, ni se le atribuye un delito en tentativa, la detención se vuelve arbitraria.

64. Cuando el Gobierno se refiere a las reglas de convivencia o el orden de la comunidad, la fuente destaca el artículo 72 del Código Penal, donde se contempla que el estado peligroso se demuestra mediante la “conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Se alega que todo aquel que tiene una conducta en contradicción con la moral socialista, según es definida por el Gobierno, puede ser acusado y privado de libertad. Las medidas de detención predelictivas se aplican a todos aquellos que el Ejecutivo entiende que obran y se rigen por una moral distinta de la imperante, reprimiendo la diversidad de pensamiento y manifestación de las ideas.

65. En cuanto a la condena adicional impuesta en prisión, por involucrarse en un desorden interno y amenazar a las autoridades, la fuente alega que se trató de una



fabricación de testigos en un entorno controlado por el Estado para imponer seis meses adicionales de prisión.

66. En el caso del Sr. Amaro Hidalgo, la fuente destaca que el Gobierno no negó, ni presentó contradicción alguna, respecto de los hechos narrados por la fuente relativos al arresto. A saber, que este se llevó a cabo en la vía pública mientras el Sr. Amaro Hidalgo y un compañero se encontraban ejerciendo su libertad de expresión, portando unas camisetas con mensajes políticos.

67. Posteriormente se habría producido un incidente en las dependencias policiales, que habría sido la base para la actual privación de libertad, ante lo cual la fuente destaca que el arresto no debió haber ocurrido en primer momento. Adicionalmente, se destaca que los únicos testigos del supuesto delito cometido en la estación de policía son los mismos oficiales aprehensores, y que no existe prueba que sustente la acusación, más allá de esos testimonios que se alega son falsos.

68. Respecto del incidente que dio lugar a la ampliación de la condena, la fuente señala que el 17 de septiembre de 2018 el Sr. Amaro Hidalgo se habría negado, ante el teniente coronel jefe de la prisión Agüica, a realizar nuevas tareas en el penal, luego de su jornada laboral. Ante ello, habría sido esposado y fuertemente golpeado por autoridades penitenciarias, frente a los otros reclusos.

69. La fuente reitera que, de acuerdo al Decreto-ley núm. 81, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y su Reglamento, la profesión legal está subordinada al Poder Ejecutivo. En las causas en las que interviene el Estado, los abogados asignados que ejercen una fuerte defensa arriesgan sus licencias para la práctica de la profesión, pues se están enfrentado al Estado, que es no solo quien paga sus sueldos, sino quien decide los ceses de los bufetes colectivos, paga las nóminas y tiene control sobre los estatutos y funciones. El proceso de admisión es ideológico, y el control de altas, bajas y ceses lo lleva de forma directa el Ministro de Justicia.

### **Deliberaciones**

70. El Grupo de Trabajo agradece a las partes por la información suministrada y por su cooperación.

71. El Grupo de Trabajo ha señalado en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales que constituya una detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La sola afirmación de que se han seguido los procedimientos legales establecidos no es suficiente para desvirtuar las alegaciones presentadas en cada caso<sup>1</sup>.

### *Categoría I*

72. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el Sr. Guía Piloto había sido seguido por autoridades e incluso privado de su libertad en ocasiones anteriores por motivo de su actividad o participación política como opositor al Gobierno<sup>2</sup>.

73. En el presente caso, el Grupo de Trabajo constató que el 1 de diciembre de 2016, el Sr. Guía Piloto fue requerido por agentes policiales, vestidos de civil, para que se identificara, quien posteriormente a un intercambio de palabras, fue privado de su libertad.

74. El Grupo de Trabajo constató que, al momento de su arresto, el Sr. Guía Piloto fue requerido por agentes del orden para identificarse, sin que ningún comportamiento lo justificase; es decir, que el acto de molestia de la policía para solicitar documentos de identidad no fue consecuencia de conductas que pudieran suponer que había cometido o estaba a punto de cometer algún delito. A partir de ese contacto inicial se generó una

<sup>1</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>2</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 29/2019, Medidas cautelares núms. 306-19, 307-19 y 326-19, 11 de junio de 2019.

discusión o intercambio de palabras, después de la cual el Sr. Guía Piloto fue arrestado y posteriormente procesado.

75. El Grupo de Trabajo no recibió información alguna de que el Sr. Guía Piloto hubiera sido acusado del delito de tentativa de robo, ni de robo alguno, ante las autoridades jurisdiccionales. Tampoco se recibieron elementos de convicción que hicieran creer al Grupo de Trabajo que el Sr. Guía Piloto fue detenido en flagrancia, ni por orden judicial.

76. Por el contrario, el Grupo de Trabajo recibió información de las partes consistente en que fue a partir del intercambio de palabras con las autoridades, que el Sr. Guía Piloto fue acusado y condenado por desacato y desórdenes públicos, en virtud de los artículos 144.1 y 200 del Código Penal.

77. Por lo que se refiere a la detención de la Sra. Mendoza Reyes, el Grupo de Trabajo recibió información convincente de que, en diciembre de 2017, fue condenada a dos años de internamiento por peligrosidad social predelictiva, conforme a los artículos 72, 76.1 y 78 del Código Penal, y posteriormente condenada a seis meses por desacato conforme al artículo 144.1.

78. En cuanto al Sr. Amaro Hidalgo, el Grupo de Trabajo fue convencido de que fue arrestado en agosto de 2016, junto con otro activista de su partido, por agentes de la policía. Si bien en su respuesta el Gobierno se limita a indicar que fue conducido por dos agentes del orden a la policía con otro ciudadano, porque ambos se negaron a cumplir con los requerimientos de dichos funcionarios, no especifica los motivos de los actos de molestia o el fundamento del arresto inicial. Tampoco se refuta la alegación relativa a que las autoridades les habían solicitado remover su camiseta que tenían impresas expresiones de mensajes críticos. La fuente indica que los policías le habrían exigido al Sr. Amaro Hidalgo abandonar la vía pública o removerse la camiseta, lo cual rechazó, generando un intercambio de palabras que motivó la detención y posterior enjuiciamiento. Fue sentenciado a tres años de prisión por desacato y atentado, conforme a los artículos 144.1 y 158.1 del Código Penal.

79. El Grupo de Trabajo desea señalar que los tipos penales de desacato, desórdenes, peligrosidad social y atentado, contenidos en el Código Penal, son sumamente vagos y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar certeza legal a la población<sup>3</sup>. El Grupo de Trabajo desea recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado: “Eliminar las figuras de la ‘peligrosidad’ y la ‘especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos’, contenidas en el Código Penal”<sup>4</sup>.

80. El Grupo de Trabajo ha establecido anteriormente que el principio de legalidad requiere que las normas se formulen con suficiente precisión para que el individuo pueda acceder y comprender la ley, y regular su conducta en consecuencia. En ese sentido, el Grupo de Trabajo considera que los tipos penales por los que fueron juzgados y privados de libertad el Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, al ser sumamente vagos, no permiten precisar su significado ni identificar la conducta a regular, por lo que contravienen las obligaciones internacionales de Cuba, y los invalida como base jurídica del arresto, lo cual hace imposible invocar fundamento legal para justificar la detención, convirtiéndola en arbitraria<sup>5</sup>.

81. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo es de la opinión que las detenciones del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, habiendo sido impuestas en violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son arbitrarias conforme a la categoría I.

### *Categoría II*

82. El Grupo de Trabajo destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole,

<sup>3</sup> Opiniones núms. 8/2017, párr. 36; y 20/2017, párr. 35.

<sup>4</sup> Informe Anual 2018, cap. IV.B. Cuba, párr. 122, apdo. 6.

<sup>5</sup> Opiniones núms. 8/2017, 20/2017, 62/2018 y 32/2019.

oralmente o por cualquier otra forma. El ejercicio de ese derecho solo puede estar sujeto a restricciones, expresamente fijadas por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública<sup>6</sup>.

83. La libertad de opinión y de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades son base para el ejercicio efectivo de una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la participación política, contenido en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

84. La libertad de expresión es de tal importancia, que ningún gobierno puede conculcar otros derechos humanos por las opiniones políticas, científicas, históricas, morales, religiosas o de cualquier tipo, efectuadas o atribuidas a una persona. No es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos calificar como delito la expresión de una opinión, ni tampoco es permisible que una persona sea acosada, intimidada o estigmatizada, detenida o sujeta a prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones.

85. El Grupo de Trabajo está consciente de que el Sr. Guía Piloto es un activista político y que, como se observó en el apartado anterior, la detención, acusación y procesamiento se efectuó a partir de la fabricación de una sospecha por policías que lo seguían, lo que derivó en un arresto, y posteriormente en una sentencia por su responsabilidad en un delito contenido en un tipo penal vagamente definido. Además, por la información recibida, el Grupo de Trabajo constató que durante el proceso se acusó al Sr. Guía Piloto de mostrar una conducta desajustada, por pretender trabajar por la consecución de elecciones libres y democráticas, y de mantener relaciones con individuos de interés policial, quienes son otros activistas políticos. Por todo lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Guía Piloto se hizo para coartar sus libertades de expresión y participación política.

86. La Sra. Mendoza Reyes es integrante de la Unión Patriótica de Cuba y las autoridades la detuvieron bajo una figura penal vagamente definida, sin cometer un delito, luego de repetidas advertencias de que modificara su conducta y actividades, afectando su libertad de expresión. En vista de ello, el Grupo de Trabajo considera que se trata de una detención que se debe a sus opiniones y expresiones políticas, así como también por ejercer su derecho a participación política, por su involucramiento en actividades del partido político mencionado.

87. De la misma forma, el Grupo de Trabajo recibió extensa información que le permite considerar que la detención del Sr. Amaro Hidalgo, al ser un miembro de un partido político de oposición y por el uso de una camiseta con mensajes políticos, se ejecutó como resultado de que este había ejercido su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que fueron contrarios al Gobierno, así como su derecho a la participación política.

88. Más aún, el Grupo de Trabajo observó que la privación de la libertad del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, fueron efectuadas en el marco de detenciones arbitrarias sistemáticas a opositores políticos, cometidas por autoridades cubanas de los últimos años. A ese respecto, en su informe más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que entre enero y noviembre de 2018 organizaciones de derechos humanos documentaron entre 2.150 y 2.697 detenciones arbitrarias<sup>7</sup>. En ese mismo sentido, en la tramitación de unas medidas cautelares, la Comisión Interamericana reconoció que en Cuba se emplea sistemáticamente la detención arbitraria como “método de hostigamiento” en contra de organizaciones políticas opositoras, como es la Unión Patriótica de Cuba, señalando que las personas son acusadas de desorden público, peligrosidad social predelictiva y desacato. También ha identificado que las personas privadas de libertad en ese contexto han sido objeto de “agresiones,

<sup>6</sup> Opinión núm. 58/2017.

<sup>7</sup> *Informe Anual 2018*, cap. IV.B. Cuba, párr. 30.

amenazas y malos tratos y su acceso a atención y tratamiento médico sería restringido al interior de los establecimientos penitenciarios”<sup>8</sup>.

89. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades cubanas privaron de su libertad al Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, como resultado del ejercicio de sus derechos a libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, asociación y participación política, reconocidos en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que la hace arbitraria conforme a la categoría II.

### *Categoría III*

90. En vista de los hallazgos bajo la categoría II, donde se concluyó que la detención es el resultado del ejercicio de derechos humanos, el Grupo de Trabajo consideró que no hay bases proporcionales que justifiquen la detención y, por ende, el juicio penal. Sin embargo, en vista de que los juicios sí se celebraron, concluyendo con sentencias y penas de prisión de varios años, y considerando las alegaciones de la fuente y la respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo procederá a analizar si durante el curso de dichos procedimientos judiciales se han respetado elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial.

91. Conforme al derecho internacional consuetudinario<sup>9</sup> y los artículos 9, 10 y 11 la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a no ser arbitrariamente privada de su libertad, y los acusados de un delito tienen derecho a ser oídos públicamente, en condiciones de igualdad, por un tribunal independiente e imparcial, en el examen de cualquier acusación en su contra. De la misma forma, las personas acusadas de un delito tienen derecho a la presunción de inocencia y a que en el juicio público se le aseguren todas las garantías del debido proceso legal. Este derecho comprende que las autoridades judiciales nacionales deben “velar por que las partes en el procedimiento de que se trate tengan derecho a presentar su caso completo en igualdad de condiciones, y a la igualdad de armas”<sup>10</sup>.

92. El Grupo de Trabajo ha señalado además, que para preservar esa igualdad de armas:

[s]e debe garantizar a toda persona privada de libertad el derecho a tener acceso a todo el material relacionado con la detención o presentado ante el tribunal por las autoridades del Estado. [...] El requisito de que se proporcionen los mismos derechos procesales a todas las partes está sujeto únicamente a las excepciones que se basen en la ley y se puedan justificar por motivos objetivos y razonables que no impliquen una desventaja efectiva u otra injusticia para la persona detenida<sup>11</sup>.

En ese sentido, tanto la parte acusadora como el Poder Judicial tienen obligación de asegurar que los abogados tengan acceso a la información pertinente que esté en su poder, como los testimonios de cargo, con antelación suficiente para que pueda brindarse una asistencia jurídica eficaz<sup>12</sup>.

93. Lo anterior implica que las personas acusadas tienen derecho a ofrecer pruebas y testimonios relevantes para su defensa y que tanto el material probatorio, como las personas que testifiquen, sean examinadas por las partes en el juicio. Una vez desahogadas las pruebas, el juzgado de manera objetiva y razonadamente las valorará y resolverá, conforme a lo que disponga la legislación del Estado<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Resolución 29/2019, Medidas cautelares núms. 306-19, 307-19 y 326-19, párr. 22.

<sup>9</sup> A/HRC/22/44, párrs. 37 a 75.

<sup>10</sup> A/HRC/30/37, Principio 12, párr. 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, párr. 20.

<sup>12</sup> Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (A/CONF.144/28/Rev.1), principio 21.

<sup>13</sup> Al respecto véanse las opiniones núms. 1/2015, 14/2017 y 15/2017.

*Presunción de inocencia*

94. El artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie puede ser condenado “por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos”. En ese sentido, el Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia que el derecho internacional exige que la privación de la libertad de una persona se base en un hecho concreto que justifique el arresto. Dicho hecho concreto debe ser delictivo y estar descrito como tal por la ley. Una detención fundada en el peligro de que la persona pueda incurrir en un delito no tiene sustento en la normativa internacional de los derechos humanos<sup>14</sup>. El Grupo de Trabajo ha considerado arbitrarias las detenciones que ocurren en Cuba al privarse de libertad a personas, y por largo tiempo, bajo el argumento de su supuesta peligrosidad y sin referirse a hechos concretos definidos con la rigurosidad que exige el derecho penal<sup>15</sup>.

95. Igualmente, el Grupo de Trabajo destaca que el Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación por la figura de peligrosidad social predelictiva contemplada en el Código Penal “en particular la tipificación con base en conceptos subjetivos y extremadamente vagos” indicando que estas medidas “pueden conllevar el internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación”. El Comité recomendó al Estado reformar las disposiciones del Código Penal en lo que respecta a la peligrosidad social predelictiva, para “poner fin a la detención administrativa con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas”<sup>16</sup>.

96. En el presente caso, la detención de la Sra. Mendoza Reyes, sobre la base del tipo penal de peligrosidad social predelictiva, constituye una violación de la garantía fundamental a la presunción de inocencia. La Sra. Mendoza Reyes fue privada de su libertad personal sin sentencia por haber cometido delito alguno y la utilización del tipo penal aplicado liberó a las autoridades de su deber de conducir una investigación y juicio independiente e imparcial para determinar si la acusada fue responsable por la comisión de un crimen, en violación de su derecho fundamental a ser tratada como inocente hasta prueba en contrario y del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

97. En el caso del Sr. Guía Piloto, el Grupo de Trabajo pudo corroborar, a partir de la información suministrada por el Gobierno, que este fue detenido, requerido de su identificación y se ordenó su traslado a la estación policial, sobre la base de que los oficiales que lo arrestaron sospechaban, por la actitud mostrada, la latente posibilidad de que fueran a incurrir en un delito. Posteriormente, el Sr. Guía Piloto habría sido condenado penalmente por un crimen ulterior al que se sospechaba que iba a cometer. Sin embargo, la aprehensión de los agentes policiales, reconocida por el Gobierno, evidencia que al detenido se le dio un tratamiento de culpable, solicitándole su identificación y traslado a la estación policial, antes de haber siquiera incurrido en la conducta penal por la que finalmente fue condenado. Ello demuestra un adelanto de criterio sobre su culpabilidad y la intención de detenerlo, por lo tanto, una violación a la garantía fundamental de la presunción de inocencia, en detrimento de los derechos procesales del Sr. Guía Piloto conforme al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

*Igualdad de armas*

98. En lo que se refiere a los casos de los Sres. Guía Piloto y Amaro Hidalgo, el Grupo de Trabajo fue convencido de que todo el material probatorio que pudo haber sido utilizado para probar su falta de responsabilidad no fue desahogado en juicio. En ambos casos solamente fueron empleadas las declaraciones de testigos oficiales y no se llamaron a rendir su testimonio a personas distintas que supuestamente presenciaron los hechos. Esta imposibilidad de acceder al material probatorio también generó una afectación a su derecho

<sup>14</sup> Opinión núm. 9/2014.

<sup>15</sup> *Ibid.*; véase también la opinión núm. 17/2013.

<sup>16</sup> CAT/C/CUB/CO/2, párr. 12.

a defenderse y a recibir una asistencia jurídica eficaz, en detrimento a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

99. En el caso de la Sra. Mendoza Reyes, la fuente alegó que su condena y privación de libertad fue ampliada sobre la base de la acusación de un funcionario a su cargo, sin oportunidad de participar en el proceso respectivo. El Gobierno se limitó a afirmar que su condena fue ampliada, por incurrir en desacato, en la causa 24/2018 del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no recibió información del Gobierno que evidenciara que la Sra. Mendoza Reyes haya podido ejercer su defensa en el procedimiento ante la acusación del funcionario captor.

#### *Publicidad del juicio*

100. El Grupo de Trabajo desea recordar que el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

101. En lo que se refiere a la detención del Sr. Amaro Hidalgo, el Grupo de Trabajo recibió información de la fuente en la que afirma que el juicio se celebró a puertas cerradas, mientras que el Gobierno lo niega, pero no ofrece información convincente ni verificable para sustentar su postura. El Grupo de Trabajo desea recordar que, conforme a las reglas probatorias establecidas en su práctica por este Grupo de Trabajo, en el Gobierno recae la carga de la prueba para refutar las alegaciones de la fuente y en este caso si se cumplió con el requisito de la publicidad del juicio. En vista de que en el presente caso el Gobierno decidió no hacerlo, el Grupo de Trabajo es de la opinión que el juicio se celebró en detrimento de la obligación de publicidad a que se refiere el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

#### *Asistencia legal*

102. El Grupo de Trabajo recibió alegatos de violaciones al derecho a la asistencia legal en contra de los tres detenidos. La fuente ha indicado que la profesión legal en Cuba está organizada de manera tal que no existe el ejercicio independiente de la profesión. Los profesionales del derecho se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Se alega que ello implicó que los abogados del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo no los hayan defendido ni representado de manera adecuada durante los procedimientos. No formularon argumentos en su defensa, no se opusieron a irregularidades procesales, ni a violaciones de garantías judiciales, tampoco fueron efectivos en la promoción de pruebas, ni en la etapa de apelación.

103. El Grupo de Trabajo recuerda que el derecho a la asistencia legal es una garantía fundamental de un juicio justo, no solo permite al acusado conocer sus derechos y ejercer una defensa jurídica durante el procedimiento, formulando alegatos pertinentes y presentando pruebas; los abogados defensores previenen o reclaman contra violaciones del debido proceso y contra riesgos o violaciones a la integridad personal y salud de los detenidos, son una salvaguardia de la confianza pública en la justicia penal<sup>17</sup>.

104. Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, establecen entre las responsabilidades de los abogados:

proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y

<sup>17</sup> Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal (A/RES/67/187), Principio 1.

diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión<sup>18</sup>.

Igualmente, se señala que los gobiernos deben garantizar que:

los abogados: *a)* puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; *b)* puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y *c)* no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión<sup>19</sup>.

105. En ese mismo sentido, los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal establecen que:

[l]os abogados deben poder desempeñar sus funciones con eficacia e independencia, sin miedo a represalias, injerencias, intimidación, obstáculos o acoso. Las autoridades deberán respetar la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y los detenidos<sup>20</sup>.

106. En el presente caso, el Gobierno negó que los abogados dependiesen del Ministerio de Justicia, señalando que el artículo 5 del Decreto-ley núm. 81 sobre el ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, define a esta institución como una entidad autónoma nacional, de interés social y carácter profesional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por juristas por voluntad propia.

107. A partir de la información suministrada por la fuente, y ante la ausencia de información en contrario del Gobierno, el Grupo de Trabajo pudo verificar que, bajo el Decreto-ley sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y su Reglamento (dictado por el Ministerio de Justicia), el Ministerio de Justicia ejerce extensivas funciones reglamentarias y de supervisión sobre la profesión legal. Ello incluye la alta inspección de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la determinación de tarifas por servicios legales, sirve como instancia administrativa de apelación contra decisiones que niegan el ingreso o separan a individuos de la profesión legal, recibe informes de la junta directiva nacional, puede autorizar el ejercicio de la profesión, aprueba la creación y extinción de bufetes colectivos, supervisa el régimen de entrenamiento de abogados recién egresados, entre muchas otras (véase los artículos 3, 11, 20, 29 y disposición especial primera del Decreto-ley, así como los artículos 20 y 42 del Reglamento).

108. Esta no es la primera vez que el Grupo de Trabajo se encuentra analizando un caso donde se alega que ha habido serias irregularidades en el acceso a la asistencia legal para detenidos en Cuba; por el contrario, se ha verificado en casos recientes que los detenidos no han contado con la garantía fundamental de acceso a un abogado que pueda ejercer su defensa sin limitaciones o interrupciones<sup>21</sup>. El Grupo de Trabajo inclusive ha recibido casos de abogados que han sido sometidos a detención arbitraria<sup>22</sup>.

109. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo toma nota de que el Comité contra la Tortura ha señalado con preocupación que:

no se han producido cambios significativos en el sistema de justicia del Estado parte desde la presentación de su informe inicial en 1997. En particular, observa con

<sup>18</sup> Principio 14.

<sup>19</sup> Principio 16.

<sup>20</sup> A/HRC/30/37, principio 9, párr. 15.

<sup>21</sup> Opiniones núms. 12/2017, 24/2018, 59/2018 y 66/2018.

<sup>22</sup> Opinión núm. 64/2017.

preocupación la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados<sup>23</sup>.

110. En los casos de la detención y enjuiciamiento penal del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, sobre la base de toda la información disponible ante él, el Grupo de Trabajo concluye que no contaron con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente, que haya representado los derechos y ejercido la defensa de los acusados de manera libre, de conformidad con los estándares internacionales mencionados.

111. En suma, el Grupo de Trabajo fue convencido que las autoridades cubanas inobservaron de manera grave normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo imparcial en perjuicio del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual hace que la detención sea arbitraria conforme a la categoría III.

112. En vista de las alegaciones adicionales presentadas por la fuente, el Grupo de Trabajo ha decidido referir el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

113. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Estado no ha ratificado el Pacto, por lo que no es parte en el mismo; sin embargo, Cuba firmó dicho tratado en 2008, por lo que se exhorta al Gobierno a respetar el objeto y el fin de dicho tratado, mientras que se hacen votos para su pronta ratificación<sup>24</sup>.

114. Finalmente, y con el objeto de que el Grupo de Trabajo pueda entablar un diálogo directo con el Gobierno y con representantes de la sociedad civil, con miras a lograr una mayor comprensión y mejora de la situación de privación de la libertad en el país y las causas en que se basa la detención, el Grupo de Trabajo sugiere al Gobierno que considere favorablemente invitarlo al país para llevar a cabo una visita oficial.

### **Decisión**

115. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Josiel Guía Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II y III.

116. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo y ponerla sin dilación en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

117. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y al Sr. Amaro Hidalgo inmediatamente en plena libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

118. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de estas personas y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

<sup>23</sup> CAT/C/CUB/CO/2, párr. 18.

<sup>24</sup> Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículo 18.



119. De conformidad con el párrafo 33, apartado a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

120. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

#### **Procedimiento de seguimiento**

121. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y al Sr. Amaro Hidalgo y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y al Sr. Amaro Hidalgo;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Guía Piloto, la Sra. Mendoza Reyes y el Sr. Amaro Hidalgo y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes, en particular el Código Penal y las prácticas de Cuba con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

122. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

123. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

124. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>25</sup>.

*[Aprobada el 19 de noviembre 2019]*

---

<sup>25</sup> Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 3.